



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

ENERO 2024

La reforma previsional en punto muerto

El gobierno se anotó un pequeño triunfo al lograr que la cámara de diputados aprobara la idea de legislar el proyecto de reforma previsional por una mayoría de 84 votos, pero la derecha no alcanzó a cosechar una derrota, pese a que se jugó por rechazar. Varios de los llamados “parlamentarios no alineados” (¿), si bien votaron a favor, optaron por rechazar algunos de los artículos centrales del proyecto. Entre otros, el de dividir la cotización adicional del 6 por ciento, destinando un 3% a capitalización individual y el otro tres al pilar solidario. De igual manera, rechazaron la indicación que le permitía al estado participar, en igualdad de condiciones, en la administración de los fondos. Todo esto, pese a que suscribieran el documento, en conjunto con la DC, PDG y Demócratas, proponiendo el destino alternativo de la cotización adicional.

Con este resultado, la discusión vuelve a fojas cero. La derecha insiste en destinar la totalidad de la cotización adicional a capitalización individual, proponiendo financiar el pilar solidario, con fondos generales de la nación (impuestos), en consonancia con la propuesta de las AFP.

Por cierto, el otro tema sensible, del que han alertado diversos poderes fácticos (entre ellos, el diario El Mercurio), es el de cerrar la puerta a la participación del estado en la administración de los fondos previsionales, sosteniendo que ello implicaría el riesgo de estatización o injerencia indebida del estado en los mercados.

Claramente estos serán los temas más complejos en la tramitación del proyecto en la cámara alta, en donde el oficialismo está en minoría. La derecha y republicanos suman 24 senadores y no caben muchas dudas que tanto Ximena Rincón como Matías Walker, los dos senadores Demócratas, tenderán a alinearse con la oposición. No tan sólo por convicciones sino también por intereses electorales. La torpe e inoportuna amenaza de la secretaria general de la UDI a Demócratas, es muy real. Tal como lo ha reafirmado el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum.

El gobierno ha dado muestras de una gran flexibilidad para buscar un acuerdo amplio en torno a esta reforma, que se viene discutiendo hace más de una década, incorporando diversas propuestas, no todas compatibles con la coherencia que la reforma previsional requiere, pero difícilmente puede ceder en estos dos temas centrales de la reforma, sin negar el principio de solidaridad intergeneracional y la posibilidad que los ahorrantes puedan elegir a quien administra sus ahorros.

Tanto el gobierno como los senadores oficialistas enfrentan un duro desafío para abrirle camino a una reforma que parece estar en un punto muerto. La derecha se ha mostrado irreductible en la defensa del actual sistema previsional y el rol de las administradoras privadas y todo indica que puede imponer sus puntos de vista.

Un problema no menor que enfrenta el gobierno en torno al debate previsional es como es percibido por la opinión pública, Las encuestas señalan que una amplia mayoría de la población, bastante permeada por el individualismo, es partidaria de que la cotización adicional vaya íntegramente a capitalización individual (con mi plata no. Una campaña impulsada por las propias administradoras privadas), y no entiende mucho lo que verdaderamente está en juego en la reforma, que permite avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, que beneficia a una amplia mayoría de los chilenos.

Sería muy relevante que la negociación parlamentaria, fuera acompañada de una masiva campaña de pedagogía respecto del sentido y contenidos de la propuesta gubernamental, en donde, tanto los partidos, como las organizaciones sociales e instituciones académicas, desarrollaran roles protagónicos.

En verdad, en torno a esta reforma, se libra una áspera batalla por el poder político y económico que han concentrado las AFP, sin cumplir la promesa original de asegurar tasas de reemplazo cercanas al 70 % de las remuneraciones.

Diversos técnicos y economistas sostienen que los cálculos oficiales contienen errores y desviaciones y que no es posible alcanzar estas tasas de reemplazo sin aumentar la edad de jubilación, subir las cotizaciones y disminuir la informalidad. Es tarea del gobierno refutar estas objeciones.

Los desafíos del segundo tiempo

Con la aprobación de la idea de legislar el proyecto de reforma previsional, se cierra el actual período legislativo y la primera mitad del actual mandato presidencial. El balance para el ejecutivo está lejos de ser catastrófico, como intenta proyectar la derecha. El rechazo de la propuesta de nueva constitución, emanada del consejo constituyente, dominado por la derecha, entregó un nuevo espacio para impulsar la agenda de reformas comprometidas por el ejecutivo. La economía parece haber

cerrado un ciclo de ajustes y se abren mayores expectativas de reactivación. La exigente lucha en contra del narco tráfico y el crimen organizado, registra claros avances. No tan sólo en el plano legislativo, sino también en la desarticulación de bandas criminales y leves descensos en la tasa de asesinatos. La inmigración irregular está disminuyendo y se avanza en la deportación de estos indocumentados. El reciente acuerdo con el gobierno venezolano, suscrito por el subsecretario Manuel Monsalve en Caracas, es un avance.

El presidente mantiene un sólido treinta por ciento de apoyo ciudadano, en medio de la crisis de seguridad y pese a los llamados errores no forzados, que han puesto al gobierno a la defensiva. Las pensiones de gracia a personas afectadas en sus derechos en el marco del estallido social, amenaza con convertirse en un nuevo incidente que complica al gobierno. Es más que evidente que el hecho de que una persona tenga antecedentes delictivos no puede ser un impedimento para conceder dicho beneficio. Pero hay casos y casos, sobre todo si se verifican algunas de las irregularidades que ha representado la Contraloría General de la república (como certificados médicos ilegibles o expedidos con anterioridad al estallido social). La amenaza de personeros comunistas de llevar el tema a tribunales internacionales ciertamente agrava el error.

En el caso de las reuniones de algunos ministros con sectores empresariales en la casa de un conocido lobista como Pablo Zalaquette, claramente constituyen un error y una imprudencia, como ha debido reconocer el propio presidente, llamando a sus ministros a reevaluar la necesidad de subir la información a infolobby. Ahora, tres reuniones consecutivas en la casa de Zalaquette, reconocidas por la ministra Maisa Rojas, claramente constituyen un exceso, que no se puede exculpar con la cándida explicación de la titular de la cartera acerca de que no conocía la condición de lobista de su anfitrión.

Estos errores no forzados no se borran con su simple reconocimiento (El llamado caso convenios le pesará al gobierno hasta el último día de su mandato. Al igual que los indultos y hoy en día las pensiones de gracia). Por el contrario, se acumulan, permitiéndole a la derecha proyectar la imagen de un gobierno dirigido por alumnos en práctica o simplemente chapuceros. Son errores que es necesario prevenir y evitar, en donde resulta indispensable hacer efectivas responsabilidades políticas.

Más allá de estos balances, resulta más que evidente que la segunda mitad del mandato plantea desafíos mayores para el actual gobierno. Son muchos los que especulan con la necesidad de un nuevo ajuste ministerial, que pudiera ser necesario en algunos ministerios sectoriales, pero muy difícilmente alcanzarían al comité político del gobierno (al menos durante este año).

Algunos insinúan la necesidad de un giro o un ajuste de las metas y los objetivos. Una suerte de "realismo sin renuncia", que debió hacer Michelle Bachelet en su segundo mandato (con modestos resultados).

Sin embargo, lo verdaderamente importante es reafirmar las prioridades definidas por el presidente en su discurso tras conocer los resultados del plebiscito, referidas a la

seguridad ciudadana y control migratorio, la reactivación económica, reforma previsional, empleo, salud, vivienda y educación. A estas prioridades, que coinciden con las principales demandas ciudadanas, se podrían agregar reformas al sistema político, que aseguren la gobernabilidad futura del país y que parecen contar con amplio consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias, así como una renovada agenda centrada en la probidad y transparencia, especialmente a nivel de los municipios (muchos manejados por la derecha), que se han constituido en el epicentro de sucesivos escándalos en estos últimos tiempos.

El segundo tiempo en modo elecciones

La segunda mitad del mandato estará marcada por las elecciones municipales y de gobernadores regionales, del próximo mes de octubre y la elección presidencial y parlamentaria del año próximo, que inevitablemente contaminarán la agenda política y legislativa. Para bien y para mal.

El resultado del reciente plebiscito demuestra que el país no ha dado un giro a la derecha, como pensaba la oposición. La inmensa mayoría del país no se identifica con la izquierda o la derecha. Es ajena a los conflictos partidistas y tan solo aspira que el país avance en una senda de mayor progreso e inclusión, sin violencia. Privilegia el diálogo y los acuerdos por sobre los conflictos y la confrontación.

El oficialismo tiene buenas condiciones para alcanzar un buen desempeño en las elecciones municipales y de gobernadores regionales. No tan sólo porque alcanzó muy buenos resultados en la anterior elección de alcaldes y gobernadores (15 de 16 gobernaciones), sino también por el resultado del último plebiscito, que representó un duro revés para la derecha. Además de un sólido piso electoral de un 30 %, enfrentado a una derecha cruzada por disputas por la hegemonía y el liderazgo futuro, sin claridad sobre su política de alianzas. Tan solo debe regular la competencia en su interior, Seleccionar buenos candidatos Y construir un buen discurso de futuro. Que de eso se tratan las elecciones.

La mayor contribución que el gobierno puede hacer para enfrentar estos desafíos es avanzar en su agenda de reformas y concretar sus promesas de campaña. Retomar la senda del crecimiento aparece como un imperativo. En este sentido, la anunciada agenda pro crecimiento debe contener medidas concretas y de corto plazo, para reducir los tiempos de aprobación de nuevos proyectos de inversión (permisología), estrechar los vínculos comerciales con nuevos mercados y concretar las asociaciones público-privadas en los salares, así como nuevas políticas de fomento para la pequeña y mediana empresa. La inversión pública comprometida es muy relevante, pero se requiere de inversionistas privadas, Nacionales y extranjeros.

Al final, el gobierno será evaluado por su capacidad para gestionar cambios que mejoren la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Como se incrementan sus

ingresos, se reducen las listas de espera en salud, la calidad de la educación y la infraestructura de los colegios. La seguridad en los barrios y las calles. Lo central no tan sólo es reafirmar las prioridades determinadas por el presidente, sino también mejorar la gestión política y administrativa del gobierno, evitando nuevos “errores no forzados”.

*FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)*